

Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Por sentencia de diez de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT I-100-2023, caratulados “Deudas SpA con Inspección del Trabajo”, se rechazó el reclamo en todas sus partes y se condenó en costas a la reclamante, regulándose éstas en la suma de \$300.000.

Contra este fallo, recurrió de nulidad la reclamante y funda su recurso en 2 causales, las que deduce de modo conjunto.

Invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley y, conjuntamente, la causal del artículo 478, letra e) del Código del Trabajo, por extenderse la sentencia a puntos no sometidos a la decisión el Tribunal.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia del día once de abril último.

CONSIDERANDO:

I.- Sobre la forma de interponer las causales:

PRIMERO: Que la ley procesal laboral permite esgrimir más de un causal en un mismo recurso, pero siendo ese el caso, dispone que *“deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente”*. En la especie, se interponen dos causales de nulidad de un modo conjunto.

Debe acotarse enseguida que existen dos formas o maneras de proposición conjunta de las causales de nulidad. Una primera modalidad, clásicamente admitida, designa aquello que es asimilable a lo “complementario”, que responde a una cualidad de soporte recíproco, de modo que el rechazo de una de las causales de nulidad puede traer consigo el rechazo de la otra o de las otras asociadas a ella; y otra modalidad, que deriva de su significación literal y de la regulación legal impartida en la materia. En efecto, si se acude al uso frecuente de la palabra “conjunto”, resulta que evoca lo que está junto a otra cosa diversa, se ha de concluir entonces que lo “conjunto” debe asumirse *también* como simultáneo o planteado al mismo tiempo con otra cosa diversa, pero que no es incompatible. Es esta última situación la que acontece en el presente



recurso.

II.- Sobre el recurso:

SEGUNDO: Que, la parte demandante acusa, en primer lugar, una infracción de ley, por haber vulnerado el sentenciador los artículos 359 y 360 del Código del Trabajo, y artículo 3° de la Ley N°19.880 sobre “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado”.

Explica que en la sentencia el tribunal establece que el “Certificado N°10” de fecha 18 de enero de 2023, emitido por el Inspector Provincial del Trabajo de Santiago, no sería una resolución sino una mera certificación de hechos y que, como tal, no sería una resolución administrativa que importara la aplicación de una multa, por lo que no sería reclamable conforme a lo dispuesto por el artículo 503 del Código del Trabajo, y que tampoco lo sería por las hipótesis del artículo 504 del mismo cuerpo legal, pues no habría procedimiento establecido en la Ley Procedimental Laboral para reclamarlo y –según el Juez recurrido- tampoco causaría “...perjuicio en la actuación...” contra su representada.

Luego da cuenta de la normativa relativa a la calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia y sostiene que se ha infringido el inciso cuarto del artículo 360 del Código del Trabajo, por cuanto siendo una organización sindical nueva, no se podía iniciar la negociación colectiva en tanto no estuvieran calificados los servicios mínimos y equipos de emergencia, lo que no había ocurrido.

Afirma que resulta evidente que si la resolución administrativa denominada “Certificado N°10”, emitido por el Inspector Provincial del Trabajo, constata hechos basados en expresa contravención legal y les da valor con una retroactividad nunca consagrada en norma alguna, pasa a ser tan ilegal como las actuaciones del Sindicato N°1, que omitió al órgano fiscalizador la circunstancia de que aún no se encontraba terminada la determinación de los integrantes del Equipo de Emergencia.

En cuanto a la infracción de la Ley N°19.880, artículo 3°, hace recaer el vicio al concluir el tribunal que el referido “Certificado N°10” no sería una resolución administrativa sino una mera constatación de hechos. Esto,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WYNYXNHGKNS

por cuanto afirma que, las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión y constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.

Concluye que el certificado en cuestión constituye una resolución administrativa, pues fue dictado por una autoridad administrativa, dentro el ámbito de su competencia y, finalmente, porque constata hechos (falsos e ilegales).

Agrega que el hecho que el mencionado acto administrativo sea titulado “Certificado” y no “Resolución” en nada altera su calidad de resolución administrativa y, por lo tanto, plenamente reclamable de conformidad a lo dispuesto en el procedimiento del artículo 504 del Código del Trabajo.

Por otro lado, expone que las mismas infracciones se verifican cuando en el motivo cuarto de la sentencia recurrida, se rechaza el reclamo contra la Resolución de Multa 4253/23/13, porque supuestamente “... no existe presupuesto alguno que sostenga la impugnación. Al efecto, la reclamante no expone la existencia de errores de hecho, o de falsedad de los hechos detectados por la fiscalizadora...”

Sobre el particular, sostiene que habiendo estado ambas fiscalizaciones basadas en la resolución administrativa –Certificado N°10-, que es precisamente el objeto de la presente reclamación judicial, volvía extemporánea, improcedente, e ilegal dichas fiscalizaciones y dicha multa, pues su parte ya había previamente reclamado vía judicial su procedencia.

TERCERO: Que para entender el contexto en que se enmarca el arbitrio, se debe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 420 del Código del Trabajo, serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo las reclamaciones *que procedan* contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.

Como se destaca de la transcripción del precepto, el legislador ha entregado al conocimiento de los Juzgados de Letras del Trabajo los



reclamos contra actos administrativos emanados de los órganos que forman parte de la Administración del Estado en materias de naturaleza laboral, en tanto éstos resulten procedentes (“*que procedan*”), de manera tal que es legítimo concluir que existen actos dictados por esas autoridades que, sin perjuicio de resultar eventualmente reclamables, esa reclamación no es de competencia de los Juzgados Laborales. Tal es la inteligencia que, en concepto de la Corte, debe entregarse a la expresión “que procedan”, pues de haberse pretendido por la ley que cualquier decisión administrativa en materia laboral, previsional o de seguridad social sea reclamable ante tales tribunales, sencillamente habría podido expresar que “serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo las reclamaciones contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social”.

CUARTO: Que la conclusión anterior se ve refrendada por el hecho que el artículo 504 del Código del Trabajo prevé que en todos aquellos casos en que, *en virtud de este Código u otro cuerpo legal, se establezca reclamación judicial* en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio. Como también se destaca, la ley exige para que el asunto sea de competencia del Juzgado de Letras del Trabajo que la reclamación judicial se establezca en el Código del Trabajo o en otro cuerpo legal.

QUINTO: Que, en este contexto, aún considerando que el “certificado N°10” objeto principal de este reclamo sea considerado una resolución en los términos del artículo 3° de la Ley N°19.880, debe aceptarse que se trata de una hipótesis en que no se establece una *reclamación judicial*, como exige el artículo 504 antes transcrito. Tampoco se trata de una resolución que imponga una multa administrativa que haga procedente el reclamo del artículo 503 del mismo cuerpo legal.

SEXTO: Que lo anterior obliga a concluir que la actuación del Juzgado de Letras del Trabajo ha sido requerida en un negocio que no es de su competencia, de modo tal que éste no sólo puede, sino que -en rigor-



debe excusarse de abocarse a su conocimiento.

No hay tampoco, por último, desconocimiento de la universalidad y la efectividad de la tutela jurisdiccional garantizada en el inciso segundo del artículo 38 de la Carta Fundamental, en tanto lo que en esta sentencia se afirma es únicamente que el citado “Certificado N°10”, no es reclamable ante los Juzgados de Letras del Trabajo (tribunales especiales), pero nada impide que se la reclame ante los tribunales ordinarios.

No existe duda en orden a que las decisiones de los órganos de la Administración del Estado están sujetas al control de la jurisdicción, pero ese control puede alcanzar el *mérito* de la decisión administrativa únicamente cuando el legislador lo ha previsto así. En efecto, diariamente los órganos administrativos adoptan infinidad de determinaciones que afectan a los particulares y en rigor la legalidad de todas ellas es revisable por los tribunales de justicia si se les atribuye algún defecto de nulidad, precisamente a través de la acción de nulidad de derecho público que se tramita ante los tribunales ordinarios; más el control judicial del mérito de la decisión, esto es, de la sustancia de lo que se ha decidido, sólo queda reservado para aquellos casos en que la ley lo ha previsto.

En materia del Derecho del Trabajo el legislador contempló la reclamación contra decisiones administrativas de multa, permitiendo a juzgados especializados revisar el mérito de la determinación, y entregó también a estos órganos jurisdiccionales el conocimiento de otros reclamos en materias específicas distintas de la multa contra decisiones administrativas, pero no de todas ellas. Dicho en términos simples: no todas las decisiones de la Dirección General o de la Inspección del Trabajo son reclamables ante los Juzgados de Letras del Trabajo, sino que únicamente lo serán cuando la ley expresamente lo haya contemplado. En los demás, como acontece en el caso de la especie según se ha demostrado, sólo podrá deducirse el reclamo por la vía de la acción de nulidad de derecho público ante el tribunal ordinario respectivo.

SEPTIMO: Que en tales condiciones y por todo lo expresado, no existe la infracción legal denunciada, puesto que el sentenciador del grado identifica adecuadamente que se trata de un acto que no admite la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WYNYXNHGKNS

reclamación judicial impetrada, por lo que no resultan aplicables las normas del artículo 359 y 360 del Código del Trabajo, siendo irrelevante en la especie el artículo 3° de la Ley N°19.880.

OCTAVO: Que, en forma conjunta, deduce la causal del artículo 478, letra e) del Código del Trabajo, consistente extenderse la sentencia a puntos no sometidos a la decisión el Tribunal. Lo anterior se fundamenta en que la sentencia repitió los mismos argumentos expuestos por la contraria en la contestación que fue declarada extemporánea, aplicándose lo dispuesto en el artículo 453 N°1, inciso 7, del código del ramo, esto es, tuvo como tácitamente admitidos los hechos fundantes del reclamo.

Destaca que el efecto procesal de dicha norma no es sólo que se tengan por tácitamente admitidos los hechos invocados en el libelo pretensor, sino que, además, los argumentos expuestos en la extemporánea contestación no existen y se tienen por no formulados para todos los efectos procesales, por lo que la sentencia de autos no puede considerarlos para fallar en uno o en otro sentido.

NOVENO: Que, en este acápite se alude a una sentencia definitiva formalmente defectuosa que se ha pronunciado más allá de lo pedido; sin embargo, a juicio de esta Corte, no es una situación que se configure en el caso. En efecto, el haber tenido por establecidos los hechos en que se funda el libelo pretensor es una situación que fija el marco fáctico de la contienda, pero no obliga al juzgador a adherir a la teoría legal propuesta por la actora. En otras palabras, el hecho de que no se haya contestado la demanda no impide que ésta sea desechada por resultar jurídicamente improcedente su pretensión, lo cual ha acontecido en el caso. Ello es independiente de que el juez haya coincidido con en el análisis jurídico efectuado en la contestación extemporánea.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** sin costas, el recurso de nulidad deducido por la parte reclamante en contra de la sentencia de diez de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT I-100-2023.

Acordada con el **voto en contra del Fiscal Judicial Jorge Luis**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WYNYXNHGKNS

Norambuena Carrillo, quien fue de opinión de anular de oficio la sentencia, por la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, al haberse extendido a puntos no sometidos a la decisión el Tribunal, dictando la sentencia de reemplazo que acoge el reclamo, dejando sin efecto la resolución administrativa denominada certificado N°10, de fecha 18 de enero de 2023, de la Inspección Provincial del Trabajo, considerando para ello lo siguiente:

a).- Que, no fue un asunto objeto de la controversia, la declaración de incompetencia del tribunal, por lo que al haber el tribunal *a quo* cambiado el objeto de la *litis*, rechazando en virtud de tales consideraciones el reclamo, dejó en indefensión al reclamante, quien no pudo referirse a esta materia, incurriéndose de esta forma en el motivo de invalidación que ha esgrimido la reclamante, independiente de la inconsistencia formal que tiene su recurso, por haber deducido precisamente esta causal de manera conjunta con una incompatible con ella.

b).- Que, en efecto, la alegación principal de la reclamada, fue que el acto administrativo reclamado no era *“en caso alguno una resolución, que es finalmente lo susceptible de ser revisado ante los tribunales de justicia, sino una simple certificación, vale decir no estamos frente un acto en que se manifieste una declaración de voluntad en el ejercicio de una potestad publica, en los términos de la ley 19.880, si no de una constancia, emitida por un funcionario competente, en que se limita a dar cuenta de una situación que consta en los registros de este servicio”*.

c).- Que, no obstante la denominación que esgrime la parte reclamada, lo cierto que analizado el citado certificado, éste no se limita a constatar una situación de hecho, sino que introduce en el mismo una resolución, con sus respectivos efectos, que es más propia de un tribunal que ejerce jurisdicción, al señalar *“Que el plazo contemplado en el inciso primero del artículo 335 del Código del Trabajo venció el 22 de diciembre de 2022 y, que, el plazo consignado en el artículo 337 del Código del Trabajo venció el día 3 de enero del 2023, por aplicación del artículo 312 del Código del Trabajo. Que, en consecuencia, se ha producido el efecto previsto en el inciso segundo del artículo 337 del Código del Trabajo, esto*



es, que el empleador ha aceptado el proyecto presentado por el SINDICATO N°1 DE EMPRESA DEUDAS.CL, R.S.U. 13.01.5206”.

d).- Que, en lo que respecto a la competencia del juzgado laboral para dejar sin efecto este tipo de “certificaciones”, en que la reclamada se atribuye una facultad que corresponde a un tribunal, se considera que por lo mismo, correspondía resolver la controversia y acoger el reclamo del particular, no solo considerando el tipo de autoridad administrativa que dictó el acto impugnado -la Inspección Provincial del Trabajo-, sino porque el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, dispone que le corresponde resolver *“las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social”*.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra(s) señora Díaz Urtubia, del voto en contra, su autor.

Laboral-Cobranza N° 1487-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WYNYXNHGKNS

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jaime Balmaceda E., Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. y Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena C. Santiago, veintitres de mayo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintitres de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WYNYXNHGKNS